

En las bases que aprobó nuestro Congreso se estudia la situación política resultante de las elecciones generales y municipales y del proceso que las precedió. Todos los acontecimientos habidos ratifican las apreciaciones que allí se hacen:

Se acabó la política del consenso. La UCD materializa hasta sus últimas consecuencias el papel de gobierno duro de la derecha en defensa brutal de los intereses monopolistas: se aprueba el PEN que constituye el programa nuclear más ambicioso de Europa, envía a las Cortes un Estatuto del Trabajador que reduce a cenizas la libertad sindical afectando muy principalmente al sindicalismo de clase, prepara importantes restricciones a los derechos democráticos (reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, etc.) y aprueba un programa económico marcado por la misma impronta y del que nos ocuparemos más ampliamente.

El único avance positivo que se ha registrado después de las elecciones lo constituye la aprobación de los Estatutos de Autonomía para Euzkadi y Catalunya, realmente avanzado en capacidad de autogobierno el primero y aceptable el segundo. Pero esto se ha debido a:

a) La lucha decidida que han venido manteniendo ambos pueblos en el transcurso de los años.

b) Concesiones de UCD a la gran burguesía vasca y catalana, representadas principalmente por el PNV y CDC, con la contrapartida de que éstos apoyen parlamentaria y socialmente el draconiano programa económico, el PEN y las restricciones a la libertad sindical y a la democracia en general.

EL PROGRAMA ECONOMICO DEL GOBIERNO

Tal y como ha dicho todo el mundo, el programa económico del Gobierno no es tal sino más bien una declaración de intenciones. Así lo reconoce explícitamente el propio programa: *"No considera el Gobierno que la respuesta a los problemas planteados pueda venir por la vía de programas detallados de viejo corte"*. Por lo tanto no tiene sentido juzgar el programa como tal; resulta mucho más importante lo que podemos considerar el análisis estructural, ya que marca,

en general correctamente, lo que nos espera en los próximos años de imponerse esa política.

El programa representa una dosis superior de realismo frente a anteriores declaraciones. Reconoce que las perspectivas se han ennegrecido en los últimos meses: *"el ritmo de crecimiento del conjunto de países de la OCDE se reduce la mitad, la tasa de inflación prevista se incrementa en un 50 por ciento y se acentúan los desequilibrios en las balanzas de pagos"*. Para después: *"el mundo ha de aceptar que ha entrado en un largo período en el que las tasas de crecimiento serán bastante más bajas que en el pasado"*. Según el programa esto llevará a una reconversión de la producción, a un crecimiento lento, a altas tasas de inflación y paro, y a un lento crecimiento del comercio mundial.

Reconoce el fracaso de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno en diciembre de 1978 y la *"relativa incapacidad (de la economía española) de generar empleo aún con tasas elevadas de crecimiento de la producción"*; reconoce que el problema se ha agravado actualmente, e, implícitamente, que seguirá agravándose al predecir como máximo un crecimiento del 4/5 por cien para los próximos años.

Como cabía esperar, el análisis confía en que los problemas tienen solución dentro del marco capitalista; sin embargo la fecha de esas soluciones se aplaza considerablemente respecto a anteriores programas.

Achaca las causas de la crisis y su agravamiento fundamentalmente a factores externos: a la subida de los precios del petróleo y a la industrialización creciente de algunos países del Tercer Mundo. Como veremos más adelante este análisis aparentemente superficial es claramente interesado.

Como explícitamente dice el programa, ante esta situación no se va a reaccionar con un programa intervencionista, sino que, por el contrario, es criterio básico del Gobierno *"tratar de aumentar el juego de los mecanismos del mercado"*. Dicho con otras palabras, el Gobierno piensa dejar que la competencia juegue con toda dureza el papel ya analizado por Marx en la superación de las crisis. No es difícil suponer lo que se llama competencia en el capitalismo monopolista.

Coherentemente con este principio, para la superación de la crisis *"será preciso fomentar la in-*

versión privada mediante los incentivos que estén al alcance del Gobierno".

Solucionados ya el problema energético (mediante el PEN) y el marco de las relaciones laborales (mediante el Estatuto del Trabajador) el programa apunta las líneas generales de una serie de actuaciones relativas al empleo, a la reestructuración de sectores industriales en crisis, financiación de las inversiones sector exterior y sector público.

No merece la pena detenerse aquí en el contenido pormenorizado de estos proyectos que, además, no aportan prácticamente ninguna novedad. Por el contrario merece la pena comentar las repercusiones de carácter general de estas medidas.

Sin ninguna duda, los próximos años vamos a asistir a una ofensiva general de la derecha que se manifestará en todos los frentes. Ciñéndonos ahora al campo económico, la necesidad de esta ofensiva viene impuesta en primer lugar por la necesidad de recuperar la tasa global de ganancia y en segundo lugar por el reparto de lo conseguido.

Las armas a emplear no son, ni pueden ser, nuevas: reducción de los salarios y despido más o menos libre, con el consiguiente agravamiento del problema del paro.

Se presentan ambos problemas profundamente ligados de una forma muy curiosa. Siempre según el programa, *"los crecimientos del PIB en los próximos años sólo podrán asegurar un crecimiento del empleo si el avance de los salarios reales no absorbe íntegramente el crecimiento de la productividad"*. Dicho con otras palabras: o los asalariados que conserven su puesto de trabajo aceptan un empobrecimiento relativo (o sea cargan con la crisis) o serán los culpables del paro de sus compañeros. Como colofón no sólo es malo conseguir mejoras, sino también intentarlo: *"La ausencia de tensiones en el proceso de negociación colectiva constituye en sí misma un estímulo para el aumento de la producción"*. Sobran los comentarios.

Respecto a los salarios el programa contiene "aportaciones" nuevas: En primer lugar, se sientan las justificaciones y argumentaciones para un abandono definitivo del mecanismo de ajuste del coste de la vida que ha protegido a la mayor parte de los trabajadores organizados en los últimos 15 años. Esta acción es la punta de lanza de una decidida ofensiva para reducir el coste de la fuerza de trabajo en España. Ya en los últimos dos años el Gobierno desmontó parcialmente dicho mecanismo logrando importantes mermas en los salarios reales. Pero en este programa económico se va un poco más lejos: se trata de ir introduciendo la idea de que la tasa de inflación que la economía española soporta por causa de efectos

externos (principalmente el coste de energía) no puede ser recuperada por los trabajadores y obligatoriamente éstos han de aceptar una reducción de su renta real disponible. El Gobierno comienza a hablar de las subidas de precios separando los componentes internos y externos. Muy posiblemente, este otoño tanto el Gobierno como la patronal fijen los aumentos de salarios algunos puntos por debajo de la tasa de inflación "interna" (sin tener en cuenta los efectos de la subida de los crudos petrolíferos), con lo cual logran un excedente aún mayor, a favor de los beneficios empresariales.

En paralelo a esta lucha salarial y como requisito imprescindible, para salir de la crisis, es preciso la reconversión de grandes sectores productivos. Los problemas financieros y de paro que esto plantea son evidentes. Como dice el informe las actuales circunstancias *"han inducido y continuarán induciendo variaciones considerables en las técnicas de producción deseables y económicamente más eficientes"*.

Puede observarse que el mismo programa reconoce que la eficiencia económica no es el único criterio para la selección entre tecnologías alternativas. Sin duda alguna el "deseables" encubre un aspecto de la remodelación en curso que no conviene olvidar: el referente a toda la problemática abiertamente política de la "organización científica del trabajo".

Dicho con otras palabras, la *"reestructuración y saneamiento de los sectores industriales en crisis"* no se hará mediante una tecnología acorde con los problemas reales de las clases populares sino con la tecnología que exijan las necesidades económicas (aumento de la explotación) y políticas (aumento del sometimiento) de la burguesía española. Lo sucedido con el PEN da una idea de lo que se proponen.

Las implicaciones de todo esto para la lucha sindical en el seno de las fábricas serán analizadas posteriormente.

Si compleja y relativamente nueva es la problemática que se plantea en las fábricas, mucho más angustiosa va a ser la situación de los parados. Tampoco en este campo el programa contiene novedades, si bien, verbalmente, ya no se considera el paro como variable residual tal y como sucedía en los Pactos de la Moncloa, e implícitamente se reconoce que seguirá aumentando.

Basta repasar las medidas específicas propuestas para atajar el paro, para comprender que el Gobierno reconoce su impotencia en este terreno. Respecto a la protección a los desempleados, las perspectivas son peores ya que se apunta una reducción en la duración del seguro de desempleo y limitaciones a su cuantía que además será más decreciente.

En resumen cada vez habrá más parados y cada vez estarán más desamparados, lo que plantea graves perspectivas de división de la clase obrera y la necesidad de incrementar trabajo específico en el sector.

Para terminar merece la pena señalar que tanto la agricultura como la pequeña y mediana empresa están prácticamente ausentes del programa.

Realmente el programa no da más de sí. Sin embargo no hay que caer en la tentación de minusvalorarlo. Que no se anuncien reformas espectaculares no significa que no vayan a producirse aunque sea sin el protagonismo abierto y específico del Estado, que se reserva el papel de hacer que estos cambios sean posibles.

El programa es sumamente ambicioso y de ofensiva. Aunque se confíen las reformas a un ente abstracto y despersonalizado (el mercado) lógicamente sólo se trata de dejar libre las manos a los monopolios en su adaptación, siempre en posición subordinada, a las necesidades de la creciente integración económica internacional.

Si lo hemos llamado de ofensiva no es en el sentido de que los monopolios se sientan capaces de sacar adelante la economía española. Simplemente se trata de que están sentando las bases para que la situación de crisis económica sirva para reforzar su poder político y económico. Apelar al mercado equivale en economía a ser implacable, a que reine la ley del más fuerte sin contemplaciones que ahora serían demasiado costosas. En este sentido el programa es claro: *"Esta reasignación de recursos impondrá aplazamientos en la satisfacción de demandas sociales que sólo podrán ser cubiertas una vez superada la crisis actual"*. Es decir, el gran capital orienta todos los recursos hacia actividades directamente productivas, restringiendo así el papel que había jugado el Estado, en los países capitalistas desde la crisis de 1929, de garantizar una serie de bienes y servicios públicos: sanidad, educación, vivienda, etc. La paralización de la tímida reforma fiscal emprendida por Fernández Ordoñez, es una medida más en la línea de una verdadera estrategia de estrangulamiento del sector público de la economía. En consecuencia, es de prever un progresivo deterioro en la dotación de los servicios públicos y, por lo tanto, en las condiciones de vida de una gran mayoría de la población.

En este sentido el programa constituye un auténtico desafío que los monopolios se han atrevido a lanzar, acuciados por la situación económica pero plenamente conscientes de la debilidad en la que el reformismo tiene actualmente sumido al movimiento obrero.

TENDENCIAS REALES QUE SE MANIFIESTAN

La quiebra del modelo anterior de crecimiento, la especial incidencia de la crisis mundial en algunos sectores industriales (siderurgia, naval), así como el proceso de la nueva inserción de la economía española en la división internacional del trabajo (integración en la CEE), empujan al gran capital español a la remodelación de todo el aparato productivo del país. Esta remodelación al servicio de las necesidades de revalorización del capital autóctono y la búsqueda de nuevas oportunidades de beneficios por parte de las multinacionales, apunta ya algunos de sus rasgos característicos en las tendencias que se observan en el panorama económico del país en los últimos meses:

1.- Cambios en la estrategia industrial. El capital abandona unos sectores y concentra sus inversiones en otros. Así, en los últimos años ha ido desinvirtiendo en la siderurgia integral y construcción naval, que han tenido que ser progresivamente nacionalizados como solución frente a su crisis (el Estado como socializador de pérdidas). Ni uno ni otro sector le sirven hoy al gran capital para la extracción de beneficios directos.

Las grandes concentraciones de capital e inversiones se dan en torno al programa nuclear, petroquímica, electrónica. Junto a ellos, el sector de automoción desempeñará un papel de primera magnitud en el futuro industrial de nuestro país: más de cien mil empleos directos y cerca de medio millón en la industria auxiliar, 250.000 millones de pesetas de inversión en el próximo cuatrienio, una producción de cerca de dos millones de vehículos al año.

Se potencian, así mismo, sectores fuertemente consumidores de energía: el aluminio y el cemento son los dos casos más significativos (1). El programa nuclear garantizará el suministro energético a dichos sectores.

2.- Aumento en la dependencia de la economía española. En los últimos tiempos se está produciendo una mayor interdependencia del capital autóctono con el extranjero. En las condiciones de economía intermedia en que se mueve España, ello significa una mayor penetración de capital exterior en nuestro país y un aumento en el control de la estructura industrial del mismo por parte de las multinacionales. El ejemplo del

(1) La plata de aluminio de San Ciprián en Galicia, consumirá, ella sola, el 6,7 por ciento de la energía eléctrica del país, con un empleo directo de únicamente 1.500 trabajadores.

sector de automoción es el más significativo, pero no el único, al respecto.

Todo este sector funcionará al servicio de los intereses de las multinacionales, integradas en sus redes mundiales de producción y comercialización, y sujeto a sus estrategias industriales multinacionales. Igualmente está tomando posiciones en nuestro país la banca extranjera.

La adecuación de España a la nueva división internacional del trabajo está siendo llevada, en última instancia, no por estrategias del capital autóctono, sino en razón a los intereses de las grandes multinacionales americanas y también europeas. En estas circunstancias no es difícil prever el papel que jugará nuestra economía y el aparato productivo de nuestro país en este modelo: será el de verdadera periferia de los países más industrializados de Europa. Ausencia de sectores de tecnología punta (informática, por ejemplo), desarrollo exportador de sectores de alto contenido energético (aluminio, cemento), grandes fábricas de montaje (automóvil) cuyos componentes vendrán de otros países europeos, crisis de sectores tradicionales (textil, calzado) por la nueva competencia de países del tercer mundo, son algunos de los rasgos previsibles en la nueva configuración industrial de España.

3.- Comienzan a aparecer las primeras inversiones importantes de capitales españoles en el exterior, principalmente en Iberoamérica. Ello agudiza, ya en la actualidad, la escasez relativa de puestos de trabajo en nuestro país, no sólo por lo que supone de desviación de recursos hacia el exterior, sino porque, en algunos casos, se está procediendo a realizar en el extranjero ampliaciones de las capacidades de producción de factorías españolas, renunciando así a la creación de empleo suplementario en nuestro país.

4.- En líneas generales puede decirse que la remodelación del aparato productivo del país, según los planes del gran capital, reforzará el carácter intensivo en capital del actual modelo económico. Es decir, se incorporará un mayor paro estructural al sistema. La industria ha comenzado ya a expulsar mano de obra desde 1975 y el campo continúa haciéndolo. Los servicios son incapaces de absorber el elevado volumen de paro. En la actualidad la mayor parte de las inversiones en marcha buscan la sustitución de mano de obra por tecnología o son intensivas en capital. Así, por ejemplo el 50 por ciento del elevado volumen de inversión del INI para 1980 se destina al sector energético.

5.- Los esfuerzos de adaptación de la economía y la industria española a la CEE de que habla el gran capital van en una clara dirección: la

búsqueda de una mayor competitividad de los productos españoles exige acercar nuestro índice de productividad a los europeos. Para ello cuentan con una doble vía: incorporación de mayor tecnología (en sustitución de mano de obra) en algunos sectores e intensificación de las exigencias de productividad de la mano de obra en la generalidad de las ramas de la producción. Es decir, en lo que respecta a este segundo componente, aumento en los ritmos de producción en las fábricas. En consecuencia, los grandes capitalistas han iniciado una verdadera ofensiva en el terreno de las condiciones de trabajo en el seno de la empresa. Disminución de tiempos muertos, aumento en las cotas de rendimientos a alcanzar, proliferación de controladores y eliminación de puestos de trabajo en la cadena, reclasificaciones de puestos de trabajo, etc, son algunos de los componentes de dicha ofensiva.

II

SEIS COMPONENTES ESENCIALES DE NUESTRA ACCION POLITICA

SINDICALISMO DE CLASE

Sobre la tecnología y la "organización científica del trabajo"

El sindicalismo de clase es un componente esencial de la opción que el Partido de los Trabajadores de España representa y que debe en todos los órdenes acentuar su personalidad propia para convertirse en un polo de atracción de los trabajadores. El sindicalismo de clase que hemos de promover y que responde a la situación actual tiene una serie de características y misiones que lo definen como tal: asambleario, elevar la combatividad de la clase obrera, luchar decididamente contra el pacto social. . . Todo esto es objeto de un informe específico a debatir en la próxima reunión del Comité Central. Aquí sólo abordaremos un aspecto que por su trascendencia ideológica y política rebasa en mucho el plano sindical.

Un elemento imprescindible en que se está basando esta reestructuración industrial es el incremento de la productividad como condición para mejorar la competitividad. Este incremento de la productividad se consigue por una doble vía: la intensificación relativa del esfuerzo físico de los trabajadores (ritmos de producción. . .) y la introducción de nuevas tecnologías en el proceso productivo.

Ambos hechos son presentados a los trabajadores y a la opinión pública de forma demagógica como imperativos de "progreso" (en abstracto), como inevitables, hacia una sociedad más avanzada, y a la oposición a ellas como posturas reaccionarias que pretenden dar marcha atrás a la rueda de la historia y llevar a nuestro país al caos.

Precisamente porque en estos momentos se está iniciando una importante remodelación del aparato productivo en nuestro país al servicio de los intereses monopolistas (autóctono e internacional), de brutales y en cierta medida irreversibles consecuencias, exige del Partido aunque sea

una primera toma de posición teórica y política necesaria para oponer una opción global en defensa de los trabajadores y sobre todo para una tarea de palpante actualidad: orientar la práctica del sindicalismo de clase.

¿En qué consiste esta primera toma de posición?

1.- La tecnología reproduce, no sólo en sus usos sino en su misma estructura, las relaciones sociales dentro de las cuales ha sido gestada. Por lo tanto, cualquier proceso de transformación social debe ir acompañado de un proceso de cambio tecnológico que modifique no sólo sus usos sino su propia naturaleza.

2.- La actitud reverente hacia la tecnología cuya evolución autónoma determinaría la evolución y el progreso social, promueve la aceptación de formas autoritarias y jerárquicas de control social así como la pasividad de las "clases subalternas". Oponerse consecuentemente a esos efectos exige enfrentarse al falso neutralismo y fetichismo tecnológico.

3.- La monopolización de los conocimientos sobre los que se sustenta la tecnología por élites de especialistas atribuye a éstos tal grado de poder que hace impracticable el control social efectivo de su actividad para ponerla al servicio de la mayoría. Por eso los trabajadores deben impulsar un proceso de apropiación de los conocimientos que están en la base de la tecnología, así como reclamar su intervención en el planeamiento de las varias opciones tecnológicas. Y si bien la consecución de este objetivo sólo podrá materializarse plenamente con un cambio en la naturaleza del poder, ello no obsta para poner esa tarea en marcha e ir alcanzando objetivos parciales.

Tres rasgos básicos, pues, y tres tareas pendientes que se desprenden de ellos: transformar, des-

mitificar y luchar por apropiarse el conocimiento y la práctica tecnológica. Pero veamos más detallada y especialmente la primera:

El debate no se plantea en el terreno de los usos de la tecnología sino en su propio contenido. No se cuestionan los "buenos" o "malos" usos sociales de una tecnología supuestamente neutral y aséptica; por el contrario se pone de relieve cómo en su misma materialidad (normas, instrumentos, procesos) reproduce las relaciones sociales dentro de las cuales se ha gestado. Es un punto bien establecido que cada tecnología sólo es viable dentro de ciertos límites de los precios de las materias primas, energía, capital y mano de obra; si éstos cambian, la propia tecnología puede quedar sin base. La actual tecnología de Occidente basada en la intensidad de capital, alto consumo de energía y materias primas no renovables y ahorro de mano de obra, no es la única tecnología posible, sino solamente aquella generada en un determinado proceso de selección socioeconómica; sus consecuencias (mayor desigualdad entre países y regiones, alienación y mayor explotación del trabajador, deterioro del medio ambiente) no son secuelas inevitables del progreso, sino únicamente de un tipo de "progreso" determinado.

En lenguaje más preciso: las fuerzas productivas, que resultan de la combinación de la fuerza de trabajo con los medios de producción bajo relaciones de producción determinadas, llevan la marca de la influencia de estas relaciones en los mismos instrumentos y máquinas, sistemas de comunicación, procesos, materias primas, fuentes energéticas, etc., que las componen. La elección de una u otra tecnología, de una u otra fuente energética, no es independiente del marco social en el que se realiza la elección y por tanto tiene un carácter de clase determinado, beneficia a una u otra clase.

Por eso, es indefendible el mito de la tecnología neutral, al servicio de cualquier amo, dispuestas a ser inmediatamente utilizadas por cualquier clase social.

El propio Marx llamaba la atención, en *El Capital* sobre esta profunda interrelación entre sociedad y técnica cuando escribía que *"la tecnología nos descubre la actitud del hombre hacia la naturaleza, el proceso directo de producción de su vida, y, por tanto, de las condiciones de su vida social y de las ideas y representaciones que de ella derivan"*.

Se entiende así que nuestro esfuerzo de transformación social debe ir acompañado por un esfuerzo paralelo de formulación de opciones de

transformación tecnológica —cuyo cabal despliegue no podrá existir sin un nuevo poder—, esfuerzo en el cual el sindicalismo de clase (a través de su lucha por el cambio de las relaciones técnicas y sociales de producción) debe jugar un papel protagonista.

Esta toma de posición posibilita:

a) Una ruptura más profunda con el revisionismo y la posibilidad de una crítica a fondo de una teoría sobre la llamada "revolución científico-técnica".

b) Una alternativa de gobierno para salir de la crisis, en la que se inserte una opción tecnológica, determinada no sólo por las necesidades de crecimiento económico, sino por el conjunto de prioridades que requieren las necesidades sociales de la mayoría de la población, la recuperación económica y el equilibrio ecológico, reducir la dependencia tecnológica, etc.

c) Respecto al tema acuciante del sindicalismo de clase que el Partido ha de promover y desarrollar:

1.- Oponerse a la creciente taylorización que se está operando: aumento de los ritmos de producción y por tanto de la fatiga del trabajador, embrutecimiento y deshumanización del trabajo, menor seguridad en el trabajo. Cabe citar el caso de FASA (Valladolid) donde las medidas tomadas de "organización científica del trabajo" están causando casos de histeria y otros de tratamiento clínico; la Balay (Zaragoza) donde han reducido grandemente los llamados tiempos muertos de una jornada de trabajo; la introducción de las tablas de rendimiento en la construcción y otras. Sobre la magnitud que va a adquirir este fenómeno hemos de señalar que el propio texto del programa económico del Gobierno espera un incremento superior de la tasa de crecimiento española respecto a otros países industrializados basándose en posibilidades de aumentar la productividad de la fuerza de trabajo en nuestro país ¡Y este desfase aspira a superarlo en sólo tres años!

2.- Oponerse a la introducción de aquellos cambios tecnológicos que provocan muy principalmente un paro cada vez mayor, y además una creciente descualificación de la mano de obra y unas formas de organización social cada vez más autoritarias y jerarquizadas. En definitiva, oponerse a la reconversión industrial del modo como se está haciendo y el abandono de sectores productivos que so pretexto de ineficacia económica responden a las necesidades estrictas de la revalorización del capital y al lugar subordinado y periférico que se pretende que ocupemos en la

naciones y marginaciones sociales, destacando la lucha por los derechos de la mujer en la familia, el trabajo y la educación, por su efectiva equiparación ante la ley con el hombre; la consecución de una ley de divorcio democrática y progresista. Asimismo la necesaria extensión de la democracia en el ámbito sindical y laboral. La lucha por el Estatuto del Trabajador y la Ley de Regulación de la Huelga más la toma de posición sobre las leyes antes mencionadas, le confieren la plena vigencia. Este CC debe encargar a las comisiones correspondientes a través del C.E. la urgente elaboración de las bases que según el PTE deben sustentar esas leyes.

Es capital en la fase en que nos encontramos la correcta utilización del Estado democrático-burgués por el Partido del proletariado, influenciando su configuración y funcionamiento y aumentando la presencia en sus instituciones.

Rasgo particular y tarea esencial del actual periodo en España en este plano-- es la posibilidad y necesidad de luchar por influir en la estructuración y funcionamiento del Estado. Especialmente si se tiene en cuenta el abuso que del principio dispositivo (o remisiones a leyes orgánicas y ordinarias) hicieron las fuerzas parlamentarias que elaboraron la Constitución y también que UCD se está aprestando a colmar esos vacíos normativos de las partes "dogmática" y organizativa de texto constitucional en sentido restrictivo para la democracia política.

De cómo se desarrolle la regulación de los varios tipos de derechos reconocidos por la ley fundamental, y de cómo se concrete el sistema de relaciones de los varios órganos y niveles del Estado, y del Estado con la sociedad civil así como de la presencia del Partido en ese entramado, dependerá en gran medida el grado de democracia de que puedan gozar las clases populares y también será reflejo y condicionante de la correlación de fuerzas.

El Partido debe posicionarse ante cada una de las tareas legislativas de desarrollo de la Constitución que hayan de tener lugar, elaborando urgentemente las comisiones correspondientes a través del Comité Ejecutivo las bases que según el Partido de los Trabajadores deben sustentar estas leyes. Asimismo debe prestar la máxima atención a la utilización de la fuerza municipal del Partido; impulsar la creación de formas de democracia directa buscando su articulación con los mecanismos de la democracia representativa; cuidar las elecciones a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas y orientar la utilización de sus instituciones de autogobierno, etc.

Para profundizar en la peculiaridad que en estos momentos presenta la defensa de la demo-

cracia y para la determinación de algunas actitudes e importantes tareas concretas es preciso constatar la existencia de lo que se ha dado en llamar "estrategia de la tensión" alentada desde el poder e incluso por la actuación gubernamental mediante la utilización del terrorismo y la delincuencia, para crear un clima de inseguridad que justifique la escalada hacia un Estado policiaco, con la particularidad de que el pueblo no sólo asuma y reclame esa escalada sino que él mismo cumpla la función represiva contra jóvenes a los que no se les deja otra salida que la delincuencia e incluso se le induce a ella (telefilms, revistas que enseñan cómo robar un coche o cómo asesinar impunemente, etc.) Ese clima de inseguridad, por otro lado, desplaza a centenares de miles de trabajadores a posiciones conservadoras y hace concebir la idea de que fuera del sistema sólo existe el caos.

Todo lo anterior determina otras tareas para defender la democracia:

—Ante esta ofensiva del capital, hemos de desplegar un gran esfuerzo para denunciar y clarificar ante los trabajadores las causas y los objetivos a que obedece esta estrategia de la tensión y a quién y para qué sirve realmente el "Estado policiaco".

—Ante la actuación del terrorismo rechazamos categóricamente aquél, pero exigimos a la vez del Gobierno y la oposición que se tomen las medidas políticas y sociales que sienten las bases para erradicarlo. Frente a los fascistas exigimos su ilegalización inmediata y la promulgación de una Ley Antifascista, así como la depuración de elementos ultras de las FAS y demás cuerpos de seguridad del Estado que incurran en comportamientos anticonstitucionales, reduciéndose así el riesgo de golpismo fascista. La oposición rotunda al incremento del aparato policiaco (número, equipamientos...).

—Defendemos el derecho de toda la población a decidir sobre los grandes problemas que afectan al presente y al futuro de nuestra sociedad (OTAN, nuclearización, CEE), en tanto que fundamentalmente son cuestiones políticas en las que todos los ciudadanos pueden y deben pronunciarse en Referéndum.

—Ante la escalada represiva que se ampara en la supuesta lucha contra la delincuencia y principalmente ante la política juvenil del Gobierno:

—Denunciamos al sistema (por tanto al poder y al Gobierno), por generar las condiciones que empujan a la juventud hacia la delincuencia, como la falta de empleo, de escuelas, de actividad cultural y recreativa, etc.

—Rechazamos categóricamente "soluciones" como el incremento constante de policías en

los barrios o la formación de esos piquetes de vecinos.

--Exigimos medidas concretas que mejoren la situación de la juventud y específicamente en cuanto a los jóvenes delincuentes demandamos una política orientada hacia su recuperación y reinserción social (5).

--Nos oponemos a la rebaja de la edad penal y cuantos medios sirven para engrosar esa "fábrica de delincuencia común irrecuperable" que son las cárceles.

A la par y ante el problema de ofrecer una auténtica seguridad ciudadana exenta de restricciones a los derechos de los ciudadanos proponemos, junto a las policías autóctonas, la formación de un cuerpo de seguridad desarmado (por ejemplo a través de la reforma de la actual Policía Municipal) que dependa directamente de los Ayuntamientos y que éstos ostenten la autoridad en cada municipio respecto al orden público y en tanto se establece la forma de efectuar esta propuesta, es preciso que se restituyan los poderes de los ayuntamientos en el tema del orden público eliminados tras el triunfo de la izquierda en las elecciones municipales.

--Ante cada nueva agresión o acto represivo es preciso que el Partido encabece una respuesta adecuada y responsable, apoyando la formación de Comisiones Cívicas para la Defensa de la Democracia, tal y como diversas experiencias de los últimos meses aconsejan impulsar como instrumentos de unidad de diversos sectores ciudadanos interesados en la defensa de la democracia.

LA SOBERANÍA E INDEPENDENCIA DE ESPAÑA Y LA CUESTIÓN NACIONAL

"En esta era del imperialismo es particularmente importante... partir de realidades concretas, no de postulados abstractos en todos los problemas nacionales". (Lenin).

Nuestro Congreso de unificación sentó los criterios básicos sobre la cuestión nacional. No obstante, por su repercusión político-práctica, debemos explicarnos las causas de la nueva magnitud alcanzada por los movimientos nacionales (no sólo en España, sino en toda Europa) muy principalmente para comprender el problema de las hasta hoy llamadas regiones y en consecuencia para adoptar las medidas políticas que corresponden.

Durante algún tiempo se pretendió hacer creer que había llegado el fin del nacionalismo. La progresiva internacionalización de las relaciones sociales promovida por el capitalismo a todos los niveles (económico, político, ideológico) vino acompañada de un intento de presentar a las demandas nacionales como algo superado, más propio de las posiciones trasnochadas de románticos decadentes que de las modernas posiciones que reclamaba el progreso. La vida, sin embargo, les ha negado la razón. En Bretaña, Córcega, Escocia, País de Gales... en España, se aprecia un resurgir de las reivindicaciones y movimientos nacionales y regionales ¿por qué?

El desarrollo del capitalismo ha venido acompañado como es lógico, de un proceso de concentración y centralización nacional e internacional del capital, que ha alcanzado en la actual fase del capitalismo niveles hasta ahora desconocidos. Este proceso tendente a mantener y acrecentar la acumulación se ha desarrollado --como todo proceso en el capitalismo-- sobre la base de la aplicación sistemática de la violencia, la opresión de los pueblos, el incremento de las desigualdades y desequilibrios en el desarrollo y en el pisoteo de su personalidad específica.

Que el desarrollo del capitalismo vaya acompañado inevitablemente de este proceso de concentración y centralización del capital no justifica el carácter reaccionario del mismo, al tiempo que promueve inevitablemente la reacción de los pueblos.

En el capitalismo, unas zonas crecen a nivel económico no sólo más que otras, sino que crecen a cuenta de las otras. Es decir, la acumulación capitalista conlleva procesos de expoliación de los recursos de los pueblos para acelerar la concentración espacial a grandes costos de las actividades económicas. Esta concentración ha alcanzado niveles sin precedentes a partir de la II Guerra Mundial, manifestándose a nivel internacional por la aparición de las empresas transnacionales, la constitución de organismos de decisión económica supranacionales (Mercado Común) y la producción en serie para mercados de

(5) Por ejemplo en Suecia, los jóvenes delincuentes son juzgados por "comisiones de protección de la juventud" dependientes de los concejos municipales y en su sentencia se tiene en cuenta su personalidad específica, condición y ambiente social, etc... El Consejo Europeo viene aconsejando la sustitución del régimen de privación de libertad. Y desde un boletín del Colegio de Abogados de Barcelona se solicita que las medidas de reinserción social se lleven a cabo antes que el periodo de reclusión.

carácter continental. Por otro lado, a nivel político se tiende a la centralización creciente, avanzando progresivamente al alejamiento de los centros de decisión de las comunidades naturales, hacia la formación de organismos supranacionales de decisión. A nivel cultural se tiende a masificar las pautas de comportamiento del individuo según demande el sistema haciendo uso para ello de los más potentes medios de comunicación social de masas, alcanzando niveles desconocidos con la generalización de la televisión y la capacidad de inducción al consumo masivo del capitalismo.

De esta forma los mercados concebidos internacionalmente imponen un consumo artificial y uniforme que rompe a los individuos y a las comunidades de su cordón umbilical histórico, cultural, idiosincrásico...

Cuando se desata la crisis del sistema imperialista (que en España se une a la crisis y hundimiento del régimen dictatorial fascista) los movimientos y las reivindicaciones nacionales y regionales eclosionan, reflejando la voluntad de los pueblos de autodefinirse, de recuperar lo que les pertenece, en lo económico, en lo político y en lo cultural, de proclamarse comunidad y reencontrar su identidad como pueblo, rechazando el proceso de uniformación a que los mueve el capitalismo. En suma, el movimiento nacional y regional es una lucha contra la expoliación y los desequilibrios económicos generados por el capitalismo, una lucha de los pueblos por ser dueños de sus propios destinos y defender lo que es suyo como pueblo. Es una lucha que por consiguiente tiene un carácter progresista constituyendo uno de los pilares actuales de avance hacia el Socialismo, especialmente en España, país multinacional y sometido durante años al más férreo centralismo.

Así pues, los términos hasta ahora utilizados de "nacional" y "regional", como categorías diferenciadas en su tratamiento político no responden ya exclusivamente a las comunidades consideradas "nacionalidades históricas", debiendo considerarse los nuevos factores que intervienen en su conceptualización. En efecto, hasta el momento dichas categorías eran definidas en razón al proceso de conformación del mercado nacional en el tránsito del feudalismo al capitalismo, definiendo las comunidades en dos categorías diferenciadas. A una de ellas le "damos" el derecho a decidir su propio destino y hablamos de opresión nacional; respecto a la otra se habla de autonomía y de desigualdades económicas. Sin embargo, para la explicación de la realidad actual, de

los profundos movimientos y aspiraciones de muchas de las comunidades regionales en demanda de autonomía, en defensa de sus recursos, en la promoción de su patrimonio cultural, folklore, etc., no pueden encontrarse en el tránsito del feudalismo al capitalismo, sino en los fenómenos antes apuntados operados a lo largo del siglo XX y muy especialmente a partir de la II Guerra Mundial.

Las consecuencias son evidentes respecto a las medidas políticas a largo y corto plazo, destacándose:

1.- La eclosión del movimiento nacionalista y regionalista en un Estado plurinacional como el nuestro se produce sobre un sustrato histórico en el que las amplias corrientes federalistas han tenido un neto carácter progresista. Si a ello añadimos la consideración de que las causas que generan dicha eclosión van a continuar agudizándose, y que los actuales procesos autonómicos van a originar la decepción e insatisfacción de los distintos pueblos, hemos de concluir que la alternativa federal es la que debemos defender a pesar de que la Constitución no la reconozca.

2.- No podemos negar a ninguna comunidad de las que conviven en España (incluidas las comunidades hasta hoy llamadas regiones) el derecho a decidir sobre su propio futuro. De cara al Estado federal que propugnamos, como pacto entre iguales, todas las comunidades tienen el derecho a representarse a sí mismas en ese pacto federal.

3.- En el proceso autonómico en curso debemos defender para todas las comunidades, que alcancen las cotas máximas de autogobierno que permite la Constitución y en el tiempo más corto, oponiéndonos a la discriminación que se está manifestando hoy y que la propia Constitución posibilita.

Cuando nuestro Partido en Andalucía y Aragón demanda la denominación de nacionalidad en los Estatutos correspondientes, no está planteando un problema meramente terminológico, sino oponiéndose a ser discriminados en base a unos datos históricos manejados unilateralmente para negarles el derecho a ser un pueblo y a contar como tal con mecanismos de autodefensa y de afirmación. Sólo con esos principios básicos estará el Partido en condiciones de optar a la dirección de los movimientos nacionales que se están generando y que son más relativamente fáciles de alcanzar habida cuenta de la no existencia de burguesías fuertes con tradición nacionalista.

En las resoluciones de nuestro Congreso, se dice repetidamente, y con justicia, que hay que promover la solidaridad entre los pueblos. Esto cobra hoy una importancia especial. Había que empezar diferenciando la solidaridad política de la económica.

La solidaridad política consiste en apoyarse mutuamente para alcanzar las máximas capacidades. Como la concreción de cada Estatuto resulta de una negociación entre cada nacionalidad y el Gobierno central, el pueblo que más apoye con su lucha de masas la negociación obtendrá mayores capacidades de autogobierno. El que cada uno llegue lo más lejos posible en un momento dado es correcto. En este sentido la solidaridad no puede entenderse como que todos marchan al ritmo del que ande menos.

Pero la solidaridad económica es otra cosa ya que en economía, al ser los recursos (financieros, materiales y humanos) una cantidad fija en un momento determinado, si se toman más recursos de los que uno aporta, lo hace a costa del otro, esquilmandolo, explotándolo y por tanto aumentando las diferencias.

Esta problemática se va a proyectar sobre el tema de los conciertos económicos vascos. A tal respecto debemos defender que tales conciertos no supongan un mecanismo para aumentar los desequilibrios de tal forma que con las contribuciones de otros pueblos se financie el relanzamiento de los negocios de la gran burguesía vasca.

Para promover la solidaridad económica debemos defender medidas como:

—Aprobación de unas normas para evaluar la asignación de los recursos públicos en función de una serie de variables que podrían ser: la población, el nivel de recaudación y la potencialidad o necesidad de desarrollo.

—No facilitar la huida de recursos de las zonas subdesarrolladas con medidas como la reinversión en origen de los recursos de las cajas de ahorro y un precio diferenciado para la energía.

Si no defendemos la solidaridad con medidas concretas como las expuestas, estaremos dejando que se desarrollen las bases para el enfrentamiento entre los pueblos y el desarrollo del nuevo lerrouxismo como el que representa hoy Rojas Marcos y el PSA, y lo que es más, que se desarrolle el oportunismo dentro del Partido: que las organizaciones de las nacionalidades económicamente desarrolladas marchen en este terreno en el mismo carro de las burguesías autóctonas que como siempre, hacen pasar sus egoístas intereses económicos como intereses de toda la nación.

Tras la aprobación de los Estatutos y el establecimiento de las instituciones y capacidades en ellos contenidos se abre una nueva fase, una de cuyas tareas esenciales es la de **reconstrucción nacional**: la puesta en funcionamiento de las instituciones y tareas que posibilitan los Estatutos y capacidades de autogobierno y de defensa de su identidad que conllevan en todos los órdenes. El Partido debe prepararse para impulsar esa tarea, la cual puede facilitar una colaboración con no poca gente nacionalista y progresista a condición de que se prepare para ello, que evalúe y determine en cada nacionalidad las posibilidades e instrumentos y métodos y personas para trabajar en las diferentes esferas: cultural, económica, social, política.

Especialmente en Euskadi, Catalunya y Galicia (que tendrán antes el Estatuto) debemos empezar a preparar ya las elecciones al parlamento nacional.

Revestirá especial importancia buscar la máxima unidad entre las fuerzas de izquierda y progresistas para conseguir el traspaso rápido de las competencias que se contienen en los Estatutos, para impedir la aprobación de leyes orgánicas y ordinarias, por parte del Parlamento Central o del Gobierno que tiendan a recortar la capacidad de autogobierno de las diferentes comunidades autónomas, y para promover la reforma de los Estatutos en aquellos artículos donde las competencias son limitadas.

Al mismo tiempo, la aprobación de los Estatutos y la puesta en marcha de los Gobiernos Autónomos configura un nuevo marco a la lucha de clases y una clarificación de ésta en cada nacionalidad y región. Por una parte, habrá una serie de aspectos en las condiciones de vida y de trabajo respecto a los cuales la pugna de intereses de clase se establecerá fundamentalmente en cada comunidad una vez traspasadas las correspondientes competencias; por otra, los partidos de las burguesías nacionales y los partidos reformistas que estén representados o apoyen al respectivo Gobierno autónomo evidenciarán mucho más claramente que hoy su verdadero carácter, lo que permitirá avanzar más rápidamente la conciencia de las masas. Ante ellos, el Partido habrá de adoptar una posición firme y no conciliadora, pues no se tratará ya de luchar contra el centralismo para obtener el reconocimiento de la capacidad de autogobierno sino por conseguir gobiernos autónomos progresistas que respondan a las necesidades de la clase obrera y del resto de las clases populares.

1.- Esta negociación se afronte con calma, poniendo siempre por delante las necesidades de nuestra economía y los ritmos que ello marca, con lo cual será preciso un periodo dilatado de negociaciones sin posibilidad de determinar fechas de acuerdo a priori.

2.- Paralelamente a este proceso negociador, es imprescindible que el Gobierno modifique su actitud actual y acometa la reestructuración económica, y desde ella la de los numerosos sectores en crisis, en función de nuestras necesidades e intereses internos, en aras del fortalecimiento de nuestra economía y para solucionar los principales problemas socioeconómicos que hoy tenemos planteados y no en función de ese papel periférico que se nos pretende asignar desde el exterior.

3.- La puesta en marcha de esta política económica alentada por el propio gobierno determinará la posibilidad y la necesidad de que nuestras autoridades se presenten en la mesa de negociación con propuestas concretas, no sólo de forma sino fundamentalmente de contenido, en torno a los diversos aspectos donde los intereses de ambas partes sean divergentes. De este modo se podrá superar la actual situación de "aceptación" (por parte española) e "imposición" (por la CEE) por una auténtica negociación.

Los pueblos deben participar en la configuración de la unidad europea. En este sentido, el Partido promoverá el establecimiento de relaciones entre los sectores populares afectados de los distintos países, y su participación en el proceso de negociación cara a la ampliación de la CEE para la defensa de sus intereses comunes frente al capital monopolista.

Consideramos que adoptar esta posición se deriva:

Por una parte de una posición consecuente de defensa de los intereses de los trabajadores y de los pueblos de España. Resultaría absolutamente contradictorio e incongruente la defensa de estos intereses con la entrada en el Mercado Común en las condiciones en las que ésta se está produciendo. Aceptar o callar, ante el desarrollo del proceso de integración sería asumir corresponsablemente las virtualidades y componentes estructurales del catastrófico modelo que tal proceso comportaría. En este sentido nuestra firme oposición, no sólo resulta la única postura congruente con nuestra alternativa de gobierno que propugnamos sino que constituye al tiempo la única vía para poder exigir la renegociación del proceso en condiciones más favorables.

Nuestra oposición al actual proceso de integración se deduce también de una posición de defensa de la dignidad nacional. En oposición, por tanto, a la actitud vergonzante de la parte negociadora española y en defensa del derecho a

exigir unas condiciones justas de integración.

Por otra parte estimamos que esta posición es la única congruente con las resoluciones adoptadas por nuestro Congreso de Unificación, en donde claramente se afirma que: "Nuestro Partido, valorando todos los aspectos relativos al ingreso defiende una integración de España en la CEE en la que queden salvaguardados los intereses de las clases populares, de las nacionalidades y regiones y de nuestra economía nacional".

Intereses que no sólo no se ven defendidos en el actual proceso, sino que se ven dañados de forma difícilmente reversible. Igualmente dicha resolución afirma que el Partido defenderá "...unas negociaciones abiertas en las que tales intereses se defiendan con firmeza, lo que se traducirá esencialmente en la exigencia de condiciones justas para la adhesión...". Actitudes y condiciones estas que se ven descaradamente negadas en el actual proceso de negociaciones.

Por último, es conveniente afirmar que esta postura en modo alguno debe dañar nuestra firme política antihegemonista y nuestra lucha por conseguir que los países europeos jueguen en la arena internacional un papel cada vez más independiente de las superpotencias.

ECOLOGIA Y LUCHA ANTINUCLEAR

Aun cuando los problemas relacionados con los desequilibrios ecológicos producidos por la "praxis" humana en su relación con la naturaleza son antiguos —Marx y Engels ya se ocuparon del problema—, es en la actualidad cuando, con el tipo y ritmo de desarrollo impuesto por el capitalismo monopolista de estado, durante varias décadas, se han agudizado enormemente provocando una auténtica crisis ecológica. Esta crisis se pone de manifiesto por un rápido agotamiento de algunos recursos naturales, una degradación ambiental que amenaza con convertirse en incompatible con el mantenimiento de los mínimos biológicos necesarios para la vida humana, fenómenos como la desertización progresiva de amplios territorios, el agotamiento de la capacidad productiva de la tierra cultivable, la contaminación de los mares, etc.

Uno de los aspectos más graves de esta cuestión, es en nuestro país el intento del gran capital de construcción en gran escala de centrales nucleares para la producción de energía, a través del PEN recientemente aprobado. Algunos científicos mantienen que la tecnología nuclear choca gravemente con los límites físicos del planeta en que vivimos.

Todo ello ha provocado un gran rechazo social que se ha traducido en la existencia —en nuestro país y en general en todo el occidente capitalista— de movimientos ecologistas y antinucleares muy potentes y masivos, que como en el caso de Valdecaballeros ha incorporado a la casi totalidad de las clases populares, evidenciando su carácter antimonopolista. Estos movimientos tienen un carácter marcadamente progresista; nuestro Partido como toda fuerza revolucionaria ha de enmarcar las soluciones que propugna teniendo en cuenta estos fenómenos de la crisis ecológica.

El I Pleno del C.C. ya marcó nuestra posición y determinó las tareas prácticas del Partido respecto al PEN y la lucha antinuclear. Por ello, aquí sólo quiero dejar constancia que la impulsión y desarrollo del movimiento ecologista y la lucha antinuclear constituye una de las tareas claves de nuestro Partido.

CAMBIAR LA CALIDAD DE VIDA

Debemos defender consecuentemente la calidad de la vida en sus diversas facetas: enseñanza, sanidad, transporte, vivienda, actividad recreativa y cultural, etc... que afecta no sólo a los sectores más pobres de la población sino a amplias clases y capas de la misma.

La crisis fiscal del estado capitalista actual está suponiendo un empeoramiento general de las condiciones de vida de los trabajadores hasta el punto de que el propio Estado está fomentando la privatización de servicios públicos tan fundamentales como la enseñanza o la sanidad. El Partido debe oponerse a esta privatización; debemos reivindicar una mejora de la dotación de presupuestos e infraestructura para estos servicios, para cubrir los graves déficits actuales, de modo que el Estado se preocupe adecuadamente de ellos en beneficio de la mayoría de la comunidad; a la vez, esa ampliación de dotaciones debe complementarse con una sensible mejora de la calidad de sus prestaciones.

Y junto a ello hemos de impulsar la más amplia participación democrática del conjunto de los sectores ciudadanos implicados en esta problemática social, a través de la práctica asamblearia que antes hemos mencionado, combinándolo convenientemente con las formas organizativas que aseguran una ligazón permanente con las masas.

La reciente democratización de los ayuntamientos ha de significar una importante palanca para la defensa de esa calidad de vida y de esta participación democrática. Y desde luego, aquellos ayuntamientos en los que esté presente el Partido tenemos la obligación de convertirlos en auténticos modelos de preocupación por las necesidades sociales y la participación directa de los ciudadanos en su gestión.

Nuestro Partido no puede concebir las condiciones de vida de los trabajadores como un simple relleno que cubre las horas en las que ni se trabaja, ni se come, ni se duerme. La satisfacción creciente de estos servicios públicos corresponde a una absoluta necesidad de humanizar la sociedad tecnocrática actual, acercando a los trabajadores hacia un progresivo control de su propio tiempo libre en la necesidad de utilizarlo para su más completo desarrollo físico e intelectual, material y espiritual en orden a una formación humana multilateral.

LOS INTELLECTUALES Y LA CULTURA

Los problemas que plantea la acción cultural son extremadamente complejos pero muy importantes. Por ello sugiero a este CC la convocatoria de una Conferencia sobre el tema, la cual podría celebrarse antes del verano de 1980 (Mayo por ejemplo) y que traslade al CE la responsabilidad de dirigir el proceso concreto de su preparación y celebración durante todos estos meses.

No obstante el desarrollo en estos momentos de una ofensiva de la derecha en este terreno y algunas experiencias que hemos ido cosechando hacen que sin temeridades podamos y debemos indicar algunas orientaciones al respecto.

Es muy importante prestar atención a la ofensiva cultural, y más en general ideológica, que las fuerzas del capital vienen desencadenando, y cuyo centro está sin duda en la Trilateral. Esta ofensiva es ya constatable en el campo científico, los medios de comunicación, la sociología, la teoría económica, y sobre todo en el campo de la producción cultural. Aquí, cuentan con sus paladines, con poderosas palancas, fuerte apoyo del Ministerio de Cultura, enorme lanzamiento publicitario, etc.

Esta ofensiva toma dos banderas principales: una, el ataque sistemático a las posiciones marxistas, manipulando en sus heridas (errores, limitaciones, deficiencias), argumentando la incapacidad

cidad del marxismo y de las sociedades generadas por procesos revolucionarios para ofrecer una interpretación y una salida válidas a los grandes fenómenos de la Humanidad en la actual situación histórica; y otra, un supuesto antiautoritarismo que no es otra cosa que la defensa de un liberalismo de viejísimo cuño adornado de retórica y formalismos.

Por otra parte esta ofensiva viene a complementar la escala de valores que tradicionalmente viene defendiendo el sistema ideológico burgués durante las últimas décadas: ensalzamiento de la individualidad, del profesionalismo falsamente apartidista, de la especialización creciente, del fetichismo tecnológico, del positivismo sociológico, del papel de "jueces universales" por encima de la realidad social, etc... de los intelectuales, y ello orientado siempre hacia la crítica feroz del marxismo y de las posiciones progresistas que abogan por el cambio social.

La derecha emprende así su reconquista del mundo intelectual, a la búsqueda de incrementar su base social y de neutralizar las posiciones de izquierda; trata de ensanchar su —hasta ahora— misérrimo campo de intelectuales orgánicos y paralelamente difuminar y diseminar ideológicamente al grueso de la intelectualidad, creando un amplio vacío —un foso— entre un sector de vanguardia (el más consecuente y progresista) y la mayoría de los intelectuales.

En la segura perspectiva de que la crisis continuará agravándose, ese vacío ha de significar un "colchón de prevención", frente a la posibilidad de avance de la izquierda, y sobre todo, de que las posiciones más consecuentes y revolucionarias puedan ir cohesionando a ese grueso mundo intelectual en torno a objetivos progresistas cada vez más en ruptura con el sistema.

Ante ello, el Partido se encuentra con la responsabilidad de hacer frente a esta ofensiva ideológica, y más aún, de contribuir al reagrupamiento de ese sector intelectual más avanzado, como condición previa e imprescindible para avanzar en la configuración de una "fuerza intelectual" articulada desde diversas plataformas de actuación y vinculada al movimiento obrero y popular en la lucha por ensanchar las posibilidades de cambio social y político.

Este trabajo del Partido entre la intelectualidad ha de fundamentarse en dos aspectos centrales:

a) Nuestra contribución, junto a ese sector más avanzado, en la creación y desarrollo de esas plataformas de intelectuales capaces de impulsar diversas corrientes sociales de debate, de oposición y lucha contra la ofensiva ideológica de la derecha, de producción ideológica progresista y de posible intervención política en pro de ese

cambio político y social. Algunas experiencias ya hemos venido cosechando, por ejemplo las actividades en torno al homenaje de Antonio Machado nos están permitiendo colaborar con un interesante grupo de profesionales de la cultura en la línea de avanzar en la defensa de una producción cultural progresista; otro ejemplo comienza a ser la Asociación en Defensa de la Salud Pública; pero es preciso multiplicar nuestro esfuerzo en esta dirección, en torno a otras facetas como: el ecologismo, el cuestionamiento del actual desarrollo científico y tecnológico; el desarrollo teórico de la economía, la sociología, etc. como ciencias sociales implicadas necesariamente en la solución de los grandes problemas del momento histórico; la demanda de una enseñanza pública socialmente útil, etc. Todas ellas son áreas susceptibles de interesar y agrupar a núcleos intelectuales dispuestos a impulsar dichas corrientes sociales.

b) Nuestra constante preocupación por buscar una síntesis y colaboración, teórica y práctica de esas corrientes y su implicación con las principales tareas del movimiento obrero y popular.

Síntesis práctica que sólo puede surgir tras la puesta en marcha y consolidación de esas plataformas, desde sus respectivas áreas de debate y de actuación.

c) El estudio autocrítico y el desarrollo del marxismo-leninismo y su aplicación creadora a los problemas de nuestros días está estrechamente ligado a la recuperación de la intelectualidad progresista y es parte esencial de nuestra contraofensiva.

SOBRE ALGUNOS ELEMENTOS DE TACTICA

Ya desde antes de las últimas elecciones y durante ellas se acentuaron las tentativas de empujar a la configuración de un sistema bipartidista en España (UCD-PSOE). El sistema por el que se celebraron las elecciones municipales y los resultados obtenidos hicieron inevitable un acuerdo de la izquierda, pero esto era sólo un hecho aislado del panorama general. Superado ese momento las aguas políticas vuelven al cauce que tenían. El acuerdo unilateral UGT-CEOE, el descuelgue de la primera de la huelga de gasolineras y su negociación por separado con la patronal, la negativa a acciones comunes con CC.OO. frente al programa del Gobierno y al Estatuto del Trabajador de UCD consagran el desmarque en el terreno sindical, que es precisamente donde radica la mayor fuerza del PCE.

El Congreso del PSOE tal como ha sido planteado no tiene otro objetivo que asestarle un golpe contundente a las posiciones más a la izquierda dentro de las cuales están los que padecen "veleidades" de colaboración con el PCE, para empujar al partido en una clara línea socialdemócrata, condición "sine qua non" para ser aceptado como alternativa de poder.

Esta responde a los intereses de la oligarquía, para la que un PSOE de ese tipo es una opción preferible al PCE, aunque éste asegura una y otra vez que es el único capaz de hacer apretar los cinturones a los trabajadores. Responde también a las continuas presiones y exigencias del imperialismo USA de alejar a los partidos eurocomunistas (por sus relaciones con la URSS) de las áreas de Gobierno. Esto supone y va a suponer las continuas tentativas de marginar al PCE; de hecho lo fundamental de la crítica de Santiago Carrillo al programa del Gobierno ha consistido en pedir un lugar bajo el sol, en asegurar que los trabajadores harán sacrificios a condición de que participen en las decisiones (léase de que participe el PCE). Ante estos intentos de marginación, dicho partido no puede sino impulsar presiones de masas, encorsetadas, pero presiones a la postre, lo cual crea mucho mejores condiciones para el desarrollo de movimientos de masas que el Partido debe empujar por encima de los límites que el reformismo le marque tanto en su intensidad como en los objetivos, de forma que respondan a las necesidades populares. Mientras dure esta situación las posibilidades de compromisos para el movimiento de masas son preferentemente o más posible con el PCE de entre las fuerzas de ámbito estatal.

Precisamente en estos momentos y ante la anunciada ofensiva contra el programa del Gobierno, el Partido y el sindicalismo de clase deben de aprovecharla para dar una fuerte impulsión a la lucha de masas, debe forzar desde los centros de trabajo, las localidades, etc., un acuerdo común para desenvolver su ofensiva. El C.C. debe poner en tensión a todo el Partido para que así lo hagan.

Nuestro Congreso aprobó en sus bases políticas el gobierno que preconizamos, la política de unidad de izquierdas coherente con él, pero ambas cosas son un objetivo que se alcanzará a través de distintas fases o periodos. Una misión de la táctica es centrar el contenido principal del eslabón en el que estamos y lo que nos proponemos cubrir en él.

Para realizar con otras fuerzas compromisos favorables para la causa revolucionaria, no sólo hace falta la coincidencia de intereses inmediatos comunes, sino también una fuerza propia para imponerlos. El periodo actual que vivimos y que será relativamente largo, se debe caracterizar principalmente por la acumulación directa de fuerzas propias. Es un periodo imprescindible para estar en mejores condiciones para romper los intentos de aislamiento político a que estaremos sometidos como opción revolucionaria que somos, como la fuerza que el gran capital no puede manipular. Con todo, el Partido puede y debe atreverse a ganar una posición destacada dentro del sistema de partidos aún no consolidado, con la multiplicada fuerza que representa nuestra unificación y teniendo como telón de fondo una crisis profunda y duradera del capitalismo monopolista, en la que los reformistas pueden sufrir un notable desgaste y pérdida de influencia entre las masas populares. De ahí el propio sistema de exposición del informe: concretar los seis componentes básicos de nuestra actividad en torno a los cuales deben montarse plataformas a las que puedan vincularse los hombres y mujeres sin partido, los sectores de masas que ya hoy tienen esas aspiraciones y que el Partido debe ser el instrumento clave para hacerlos converger.

Un elemento de singular importancia hoy para poner en pie y desarrollar estas diversas plataformas, es fomentar la participación masiva en la toma de decisiones, la práctica de la democracia directa, del movimiento asambleario. Esto por diversas razones: con ello se facilita la incorporación a la actividad política de sectores activos de masas que difícilmente aceptan una vinculación orgánica estable y rígida; de otra parte este método de trabajo es el que las tradiciones del moderno movimiento obrero y popular de nuestro país han sancionado como más idóneo y acorde con la disposición e idiosincrasia de las clases trabajadoras. Sin duda alguna, uno de los componentes que han contribuido al desarrollo de Herri Batasuna, ha sido la práctica del movimiento asambleario.

Por otro lado es posible en determinadas nacionalidades y regiones —estudiando en cada caso el proceso y eligiendo el momento oportuno— impulsar la articulación orgánica de estas diversas plataformas sectoriales en un movimiento amplio de carácter político. De esta forma, se posibilitará una gran acumulación de fuerzas que el Partido, por sus propias limitaciones de desarrollo y la conciencia antipartidista generada por el reformismo, no podría polarizar en torno suyo de forma directa; por otra parte, una articulación de este tipo, constituiría un polo de referencia y un factor muy positivo para las masas. Las aún muy limitadas experiencias que en este sentido tenemos, demuestran que esto es muy positivo, como en el caso de Irmandade Galega, en la que desde sus inicios participó el Partido.

Durante los últimos tiempos se recogen cada vez más indicios de que se intenta montar en España un partido radical al estilo de los que ya existen en otros países europeos, mediante la confluencia de movimientos ecologistas, minorías marginadas y otros y que tienen el denominador común de recoger todo el descontento existente en el pueblo respecto a los partidos de izquierda, reformistas.

“El País” le ha dedicado toda una editorial al tema. Un partido de ese tipo minaría objetivamente una parte no despreciable del espacio político y social de un partido revolucionario marxista-leninista como es el nuestro. Desarrollar a tope las tareas antes enumeradas, hacer que el Partido asuma ante la opinión pública la defensa más clara y rotunda de cada uno de esos componentes fundamentales antes enumerados, hará imposible un proyecto de este tipo.

La estrategia política del gobierno del gran capital en crisis, presupone una actitud tan sumamente restrictiva en cuanto al desarrollo legislativo y a las condiciones de ejercicio efectivo de los derechos políticos y sindicales contenidos en la Constitución, que una fuerza revolucionaria como nuestro Partido podrá verse abocada a situaciones de ilegalidad en su práctica política de clase. El Partido además de utilizar todas las armas legales e institucionales reconocidas en la Constitución, debe asumir, siempre que se requiera, la utilización de formas ilegales de lucha e inculcar a la vanguardia la conciencia de su necesidad.

Por otra parte, los trabajadores están poniendo en práctica una serie de formas de lucha que hay que tener en cuenta. Me refiero a casos como por ejemplo encerrarse reteniendo a directivos de la empresa (Standard, minería leonesa...), bloquear la Caja de Ahorros principal accionista de la empresa (Galicia), ocupaciones de fincas...

Este tipo de acciones o formas de lucha permiten atraer a la opinión pública hacia un conflicto, darlo a conocer y extenderlo, y sobre esta base impulsar más a fondo el elemento clave que es el movimiento de masas.

Camaradas:

Nuestro debate y resoluciones sobre las tareas del Partido así como el que ha de suscitarse en todo el mismo en torno a las resoluciones que tomemos tiene una doble importancia.

1º De la correcta determinación de nuestras tareas depende que hagamos o no avanzar la causa revolucionaria, fin supremo al que se debe la formación y construcción de nuestro Partido.

2º La homogenización, la plena unificación del Partido, necesita imprescindiblemente de la profundización y desarrollo de nuestra política y su puesta en marcha por todos los miembros y

organizaciones del Partido.

Estoy convencido de que este C.C. dará ejemplo a todo el Partido realizando un debate serio y abierto, un auténtico ejercicio de crítica y autocrítica, de aplicación creadora del marxismo-leninismo para responder a las exigencias que hoy nos marca la lucha de clases de una sociedad en crisis y en la que se están operando cambios profundos.

Eladio García Castro

Septiembre 1979